

Paul Preston

La destrucción de la democracia en España

Reforma, reacción y revolución  
en la Segunda República

Traducción de  
Manuel Vázquez

**DEBOLSILLO**

## Índice

TESTIMONIO DE GRATITUD . . . . .	9
GLOSARIO DE SIGLAS . . . . .	13
PRÓLOGO . . . . .	15
1. Los orígenes del cisma socialista: 1917-1931 . . . . .	23
2. Barricadas contra la reforma: la derecha legalista, 1931-1933 . . . . .	63
3. Democracia social y conflicto social: el PSOE en el poder, 1931-1933 . . . . .	111
4. La política de represalias: la CEDA, el PSOE y la polarización de 1934. . . . .	171
5. Amenazas retóricas, respuesta real: la insurrección de 1934 . . . . .	225
6. La vía legal hacia el Estado corporativo: la CEDA en el poder, 1934-1935 . . . . .	249
7. El socialismo en tensión: represión, radicalización y el Frente Popular . . . . .	289
8. El abandono del legalismo: el PSOE, la CEDA y los prolegómenos de la guerra en 1936. . . . .	325
EPÍLOGO . . . . .	373
NOTAS . . . . .	383
BIBLIOGRAFÍA . . . . .	439
ÍNDICE ALFABÉTICO . . . . .	479

## Prólogo

La salida de España de Alfonso XIII estuvo acompañada por una explosión de alegría popular y una expectación excesiva de que el nuevo régimen pudiera remediar las injusticias y deficiencias políticas tanto de la monarquía como de la dictadura del general Primo de Rivera. La victoriosa coalición republicana socialista se proponía emprender una serie de reformas sociales y construir una España moderna, libre de las influencias reaccionarias de la Iglesia católica y de las Fuerzas Armadas. La debilidad central de la República estribaba precisamente en el hecho de que se planteara un abanico tan amplio de reformas en un momento de grave crisis económica. Por tanto, la República comenzó su vida con una coalición gubernamental dispar que había asumido la tarea de destruir la influencia reaccionaria de la Iglesia y el ejército, crear relaciones laborales más equitativas, acabar con los poderes casi feudales de los latifundistas y satisfacer las demandas autonómicas de los regionalistas vascos y catalanes.

Una de las consecuencias de la anulación de la Constitución de 1876 por la dictadura de Primo de Rivera fue la desaparición de los partidos Conservador y Liberal. Por tanto, a la llegada de la República, la derecha se encontró temporalmente carente de organizaciones políticas eficaces. En cierto sentido, la clase alta y numerosos sectores de la clase media tuvieron que admitir el exilio de Alfonso XIII porque no tenían otra alternativa aunque sí acariiciaron la esperanza de que, sacrificando un rey y tolerando un presidente, podrían evitar mayores desgracias en términos de reformas sociales y económicas. Aunque el advenimiento de la Re-

pública significó que por primera vez el poder político hubiera pasado de la oligarquía a las izquierdas moderadas, la clase conservadora todavía tenía otros instrumentos para proteger sus privilegios. Para obstaculizar el proyecto reformista republicano socialista dispondría del poder económico, la propiedad de los bancos, de la industria y de la tierra, y del poder social, el control de los medios de comunicación, la prensa y la radio, el sistema de enseñanza, que en gran parte era privado. Además, los amos del poder social y económico disponían del poder persuasorio de la Iglesia y el monopolio de la violencia en manos del ejército y la Guardia Civil en su determinación de impedir cualquier ataque contra la propiedad, la religión o la unidad nacional. En este sentido, las semillas de la guerra estaban ya presentes en las esperanzas de la izquierda y en el miedo y el resentimiento de los elementos de la derecha amenazados.

Las esperanzas de los socialistas eran relativamente moderadas. Los líderes de la UGT y del PSOE sabían que la implantación del socialismo era un sueño lejano y buscaban simplemente una mejora de las condiciones de vida de los braceros del sur, los mineros asturianos y otros sectores de la clase obrera industrial. Su moderación sería vana porque los grandes latifundistas y propietarios de las minas consideraban cualquier intento de reforma como una agresión intolerable contra el reparto existente del poder social y económico. Sin embargo, en los primeros dos años de la República, antes de darse cuenta de que estaban atrapados entre las exigencias de las masas impacientes y la tenaz hostilidad de la derecha ante cualquier tipo de reforma, los socialistas colaboraron con la República en un espíritu de autosacrificio y optimismo.

El compromiso de la República de mejorar las condiciones de vida de los más pobres implicaba una importante redistribución de la riqueza. En medio de una depresión económica mundial, los aumentos salariales y el coste de mejores condiciones de trabajo no podían ser simplemente compensados por mayores beneficios. De hecho, en una economía en proceso de contracción, las reformas humanitarias parecían desafíos revolucionarios al orden económico establecido. En las provincias latifundistas del sur, los terra-

tenientes no solo hicieron caso omiso de la nueva legislación reformista, también empleaban guardas armadas para intimidar a los obreros que protestaban. Además, tanto a nivel nacional como en provincias, las poderosas redes de prensa y canales de radio de la derecha empezaron a presentar a la República como responsable de los problemas de la economía española y de las respuestas a veces violentas de las masas frustradas por la falta de cambio social.

En este conflicto y en la manera en que fue interpretado y tergiversado por la derecha se encuentran las semillas de la destrucción de la democracia entre 1931 y 1936. Reconozco que la Guerra Civil española no fue una, sino varias guerras. Lo que intenta demostrar este libro es que el conflicto social y sobre todo el agrario —endémico desde hacía siglos y que se hizo crónico durante la Segunda República— debe verse como el más decisivo de los diversos enfrentamientos dentro de la guerra civil que estalló en 1936. Esto no significa que se pueden descartar otros conflictos entre católicos y anticlericales, entre regionalistas y centralistas —especialmente militares— o entre obreros y patronos industriales. La compleja interacción de intereses religiosos, ideológicos y económicos no se puede reducir a una sola fuerza motora. Es evidente que los carlistas navarros o los nacionalistas vascos se vieron obligados a aferrarse a las posturas que adoptaron por motivos distintos del antagonismo social de Andalucía y Extremadura. Con todo, ningún enfrentamiento social o ideológico de los años treinta puede compararse en amplitud o alcance con el problema agrario.

Los dos mayores partidos de masas de la Segunda República —el Partido Socialista Obrero Español y la católica y autoritaria Confederación Española de Derechas Autónomas— encontraron suficiente apoyo electoral en el campesinado: el PSOE entre los braceros sin tierras del sur y la CEDA entre los pequeños terratenientes del centro y del norte. Ambos partidos canalizaron los conflictos agrarios de estas zonas hasta convertirlos en una cuestión de política nacional, cuyo efecto polarizador iba a rebasar con mucho sus propios confines regionales. Concretamente, las penalidades de los braceros del sur repercutieron en la escena política